

# **Procesos organizativos en el marco del conflicto socio territorial generado por el avance de la frontera agraria en los Departamentos San Martín y Rivadavia de la Provincia de Salta**

**Sergio Pablo Colina IDR – FCN – U.N.Sa**  
[colinapablo@yahoo.com.ar](mailto:colinapablo@yahoo.com.ar)

## **Eje 2: Ciencias sociales, ruralidad y medio ambiente.**

En la región Chaqueña de Salta, se desmontan grandes superficies para el desarrollo de emprendimientos empresariales para el cultivo de soja, en las zonas con mejores registros hídricos y, ganaderos, en las zonas más secas. En este escenario, nos planteamos el objetivo de analizar los procesos organizativos de quienes son afectados y ofrecen resistencia al avance del frente de desmonte, las alianzas, logros y retrocesos que se generan. Desde nuestra óptica, el tema tiene relevancia en el campo de los estudios sociales agrarios, ya que aporta al conocimiento de los esfuerzos organizativos, tendientes a acumular una cierta cuota de poder para la defensa del territorio campesino – indígena, en el marco del avance de la frontera agraria. Como metodología, utilizamos la búsqueda de antecedentes, observación participante y, fundamentalmente, realización y análisis de entrevistas en profundidad.

Como marco para el análisis se utiliza el concepto de territorio. Partiendo de lo expresado por Fernandes (2005), se entiende al territorio como el espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder. Las relaciones sociales transforman el espacio en territorio y viceversa, siendo el espacio un a priori y el territorio un a posteriori. El territorio como espacio geográfico contiene los elementos de la naturaleza y los espacios producidos por las relaciones sociales. Como resultante de una forma de poder es, al mismo tiempo, una convención y una confrontación, es un espacio de conflictualidades. Fernandes (2008:7) define la conflictualidad como el proceso de enfrentamiento permanente en las interpretaciones que objetivan las permanencias y/o superaciones de las clases sociales, grupos sociales, instituciones, espacios y territorios [...] Las contradicciones producidas por las relaciones sociales, crean espacios y territorios heterogéneos, generando conflictualidades. Las clases sociales, sus instituciones y el Estado producen trayectorias divergentes y diferentes estrategias de reproducción socioterritorial. La conflictualidad es, por lo tanto, un proceso donde el conflicto es sólo un componente. Desde nuestro análisis, conflictualidad y conflicto son dos conceptos que juegan constantemente en los avances y retrocesos de los procesos organizativos.

El avance de los desmontes, tiene efectos directos sobre las modalidades de reproducción social de la población indígena y de los productores criollos, provocando un fuerte proceso de exclusión social. La soja, forma parte del complejo agroalimentario global, por lo que, sobre el conflicto que se genera, no solo influyen los actores locales, sino también actores globales. Maristella Svampa (2008:33), sostiene que: estos conflictos se insertan en una dinámica multiescalar, en la que “lo global” y “lo local” se presentan como un proceso en el que se cristalizan, de un lado, alianzas entre empresas transnacionales y estados que promueven un determinado modelo de desarrollo y, de otro, resistencias de las comunidades locales que no comparten tal modelo ni los estilos de vida que éste impone. Ante el impulso y consecuente acción del capital, ligado en la región analizada al agronegocio global, las sociedades locales generan reacciones en defensa del territorio.

La tierra es para las comunidades indígenas el espacio físico sobre el que constituyen su territorio. Los pobladores criollos también establecen su territorio sobre un espacio físico muchas veces superpuesto al de las comunidades. por lo que, se constituye en un espacio de conflicto. Sin embargo, ante el avance de los desmontes y los intentos de desalojo, este conflicto disminuye su intensidad y se generan alianzas, aunque sean transitorias.

La ruta 86 es una vía de comunicación que nace en la ciudad de Tartagal, en el norte de la provincia de Salta, y termina en el límite con Paraguay. Alrededor de ella se asientan comunidades wichi y se han

realizado algunos de los desmontes más grandes. Las situaciones que pudieron relevarse, muestran una compleja trama de solidaridades y enfrentamientos en los que el accionar de los sectores con poder político y económico juegan un papel protagónico en el proceso de territorialización del agronegocio.

Posteriormente a la reforma Constitucional del 94, que reconoció los derechos a la tierra de los pueblos preexistentes al estado nacional y como una reacción al desmonte encarado por la empresa Desde el Sur, se formó en el año 96 la Comisión Zonal Wichi para inscribirla ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) con el fin de accionar por la tierra, sin embargo, de acuerdo a la información recibida, esta organización no tuvo mayor actuación. Individualmente, la comunidad de Lapacho Mocho, ubicada en el km 18 de la ruta, logró que la empresa propietaria de los títulos de las tierras en las que está asentada, cediera las 27 ha correspondientes al lugar en donde se encuentran las casas. Profundizando la lucha se logró que se aprobara en el año 1999 una ley de expropiación de 3000 ha, que hasta la fecha está en litigio, por diferencias en la tasación para efectivizar el pago.

En el año 2002 se formó una organización llamada Laka Tajñi, que significa nuestro bosque. Se buscó aunar esfuerzos para replicar el logro de Lapacho Mocho. Con apoyo de asesores, se confeccionó un mapa de áreas de uso, para fundamentar el reclamo. El mapa abarcó sólo las áreas ubicadas en la margen sur del río Itiyuro. En la otra orilla, estaba el lote fiscal 4 que no fue incluido por oposición de uno de los caciques cercano al entonces gobernador de la Provincia. La organización Laka Tajñi fracasó por disidencias internas pero provocadas por influencias externas. Parte de los problemas que llevaron al fracaso, han tenido que ver con el proceso de adjudicación del lote fiscal 4 que generó disputas territoriales al interior de las comunidades.

Con una intencionalidad muy clara, de acuerdo a los testimonios recogidos, la entrega de los títulos del fiscal se realizó a comunidades que poco tenían que ver con el uso territorial del lote, sumado a esto, que generó conflictos, junto con los títulos se entregó una motosierra. Por otro lado, muchos empezaron a gestionar con los titulares dominiales o el que quería desmontar trataba con la comunidad más cercana y eso, al decir de una entrevistada, les compartimentalizó el territorio y su cabeza. Ambos hechos generan divisiones.

La posesión del título, da derecho a extraer madera del fiscal. La autoridad forestal otorga guías que permiten extracción y transporte de troncos cortados. Las comunidades, rodeadas de desmontes, han cambiado su relación con el bosque adoptando, en muchos casos, la extracción de madera como un modo de generar ingresos. Para hacerlo dentro de un esquema de legalidad, son utilizadas las guías otorgadas para el ex fiscal, aunque los troncos no provengan de allí.

En 2008, una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frenó desmontes y aprovechamiento forestal. Esto produjo enfrentamientos en las comunidades, entre las que querían mantener el bosque y las que querían seguir aprovechando la madera. Incentivados por, y junto con los empresarios madereros de la zona, lograron que se abriera la posibilidad del aprovechamiento forestal. Esto generó y genera conflictualidad en las comunidades. De acuerdo a entrevistados, la extracción clandestina que se realiza de propiedades privadas, utilizando guías del ex fiscal 4, es “permitida” por los titulares, “a ellos les conviene que le saquen, así después muestran para el estudio de impacto ambiental que están trabados por nada”. En la búsqueda de sustento para sus familias, muchos integrantes de las comunidades terminan siendo funcionales al capital concentrado que avanza sobre sus territorios. Las pautas culturales que se introducen en las comunidades, generan conflictualidad e interfieren en los procesos organizativos en defensa del territorio.

La ruta nacional 81, atraviesa San Martín y Rivadavia, conectando con Formosa. Comunidades aborígenes y criollos, ocupantes de tierras privadas y fiscales, se encuentran en su área de influencia. Los procesos organizativos se fueron sucediendo en esta región, algunos de ellos con eje en la tenencia de la tierra, y otros a partir de proyectos de desarrollo. Entre los más importantes, está el de Los Blancos, departamento Rivadavia, a fines de los 80 e inicios de los 90, que tuvo el objetivo de lograr la entrega de lotes fiscales. Se generó un proceso de dialogo entre las comunidades y las familias criollas para alcanzar acuerdos de distribución de tierras. Se fortalecieron las formas organizativas de las comunidades adaptándose a las exigencias legales del momento. Los criollos, sin experiencia organizativa previa, constituyeron Comisiones Vecinales en cada lote fiscal, agrupadas en la Comisión Zonal de Los Blancos. FUNDAPAZ

y Pastoral Aborigen de Orán motorizaron este proceso con fuerte trabajo de mediación. A pesar de oposiciones políticas, se firmó en 1991 un acta acuerdo de entrega de tierras. Las escrituras fueron entregadas cinco años después.

Este proceso disparó intentos organizativos para lograr la entrega de otros lotes fiscales. Se obtuvieron algunos logros de puesteros criollos, más por contactos políticos que por resultado de procesos organizativos, y de una comunidad que logró la entrega en propiedad comunitaria de 2000 ha en Pluma de Pato, sin embargo, la mayoría de los intentos fracasaron debido a que no había una estructura de apoyo, como hubo en Los Blancos, no existía voluntad política ni organizaciones consolidadas de criollos y comunidades para presionarla. El gobernador electo en 1995, brindó un fuerte apoyo a la expansión de los agronegocios. Algunas acciones dirigidas a las poblaciones indígenas como la entrega del lote fiscal 4, la entrega de 2000 ha en Pluma de Pato y la entrega de tierras a algunos criollos, dividieron y generaron contradicciones en los procesos organizativos.

El interés empresarial para el desarrollo ganadero, comenzó a incrementarse. Esto constituyó un hecho significativo, con una incidencia dual y contrapuesta, por un lado, el poder ejercido desde este sector en los ámbitos políticos, tuvo influencia en las experiencias fallidas, pero funcionó como un incentivo a los procesos organizativos de mayor escala que se fueron desarrollando posteriormente, ya no para gestionar la entrega de fiscales, sino para resistir los desalojos de ocupantes de tierras privadas y reclamar los derechos posesorios sobre las mismas.

Los proyectos productivos, de infraestructura predial o comunitaria gestionados por ONGs, el Proyecto de Desarrollo Forestal de la cooperación alemana (GTZ) y, a partir del 93, por el Programa Social Agropecuario (PSA) del Estado Nacional, favorecieron las formaciones grupales que fueron la base organizativa. A partir del año 2000 empieza la explosión de desmontes e intentos de desalojos. Con el apoyo de las instituciones se aceleran los procesos organizativos de mayor escala. Los criollos de Hickman y Dragones, con la mediación de uno de los asesores institucionales, toman contacto con la Federación Agraria Argentina (FAA). A partir del 2002, se constituye la Asociación de Pequeños Productores Chaco Salteño (APPCHS), como una organización de base de la Federación Agraria. El rol de la FAA fue muy importante hasta el 2008. Apoyó para que la Asociación se fortaleciera y expandiera con un perfil más político, reivindicando el tema productivo, pero con eje en la tierra. La participación de las organizaciones en la Mesa de Tierras en la que interactúan instituciones de apoyo con organizaciones de base criollas e indígenas y en el Foro de la Agricultura Familiar (FoNAF) creado a nivel nacional en diciembre de 2005, adquieren importancia en la visualización nacional de la situación. Un punto culminante de los procesos organizativos, fue la decisión de llevar un candidato propio a la intendencia de la localidad de Morillos. Las organizaciones tanto de criollos como de pueblos originarios, lograron que una delegada campesina fuera electa en 2011.

La resistencia sería imposible, ante la desigualdad de fuerzas, sin la intervención de otros actores que, por su cultura, inserción en espacios socio políticos y conocimiento de la trama de relaciones de poder faciliten, entre otros aspectos, el acceso a recursos, relaciones con otros grupos e intermediaciones políticas. Los procesos organizativos de resistencia al despojo territorial, enfrentan un enemigo poderoso al que hasta ahora solo se le han podido sacar pequeñas concesiones.

Creemos que el futuro de las comunidades y de los pequeños productores, dependerá en gran medida de la capacidad de sus organizaciones e instituciones de apoyo de lograr consensos, neutralizar lo que divide e incrementar la capacidad para movilizar la resistencia. Pero, también, de la generación y gestión de propuestas que vayan más allá de la reivindicación del territorio que fue. La velocidad de avance del agronegocio, acorta los tiempos.

## **Bibliografía**

-Fernandes, Bernardo Mançano, (2005): "Movimentos socioterritoriais e movimentos socioespaciais: Contribuição teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais". En: OSAL: Observatorio Social de América Latina. Año 6 no. 16. Buenos Aires, CLACSO. pp. 273-283.

- Fernandes, Bernardo Mançano, (2008), Acerca de La Tipología de los Territorios. <http://web.ua.es/es/giecryal/documentos/documentos839/docs/bernardo-tipologia-de-territorios-espanol.pdf>
- Svampa, Maristella, (2008): “Argentina: una cartografía de las resistencias (2003-2008). Entre las luchas por la inclusión y las discusiones sobre el modelo de desarrollo”. En: OSAL: Observatorio Social de América Latina Año IX N° 24. Buenos Aires, CLACSO. pp. 17-49.